

República de Colombia
Tribunal Administrativo de Antioquia



Sala Segunda de Oralidad

Magistrada Ponente: Beatriz Elena Jaramillo Muñoz

Medellín, dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013)

REFERENCIA:	ACCIÓN DE TUTELA – INCIDENTE DE DESACATO - CONSULTA -
ACCIONANTE:	EDA DEL CARMEN ISAZA
ACCIONADO:	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y COLPENSIONES
RADICADO:	05001-33-33-027-2012-00250-01
INSTANCIA:	SEGUNDA
AUTO N°:	61
DECISIÓN:	Confirma Decisión consultada
ASUNTO:	Consulta sanción impuesta en incidente de desacato. La sanción impuesta por el juez de primera instancia debe atender a criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la sanción. No se acreditó el cumplimiento del fallo por parte de la entidad, es procedente la sanción.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la Sala procede a revisar, en grado jurisdiccional de consulta, la providencia del 8 de marzo de 2013, proferida por el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo Oral de Medellín, mediante la cual resolvió sancionar con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales al Doctor Pedro Nel Ospina Santamaria, representante legal de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – Regional Antioquia, por incumplir el fallo de tutela proferido desde el nueve (9) de octubre del dos mil doce (2012).

ANTECEDENTES

La señora **Eda del Carmen Isaza**, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales – Seccional Antioquia para la protección del derecho fundamental de petición en conexidad con los derechos a una

pronta respuesta, debido proceso a igualdad, en relación con la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.

La tutela fue concedida por el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo Oral de Medellín mediante fallo proferido el 9 de octubre de 2012, en el que se ordenó:

“PRIMERO: Por violación al derecho fundamental de petición de la señora Eda del Carmen Isaza... por parte del Seguro Social en Liquidación-Pensiones, se CONCEDE LA TUTELA.

SEGUNDO: ORDENAR al Seguro Social en Liquidación-Pensiones, por intermedio de su representante legal, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, **si aun no lo ha hecho**, proceda a remitir toda la documentación relativa a la petición presentada el 01 de Noviembre de 2011 por la señora Eda del Carmen Isaza, que aun se encuentre en su poder a **COLPENSIONES**.

TERCERO: ORDENAR a **COLPENSIONES**, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al cumplimiento de lo ordenado al ISS en Liquidación, resuelva la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes elevada por la señora Eda del Carme Isaza... el día 01 de Noviembre de 2011 relativa al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en razón del fallecimiento de su cónyuge, el señor Luis Eduardo Zapata García; dentro del plazo otorgado deberá notificar la decisión a la interesada...”¹

La señora **Eda del Carmen Isaza** instauró solicitud de incidente de desacato, con el fin de que se garantizara el cumplimiento de la sentencia proferida en los términos señalados en el Decreto 2591 de 1991. (Folio1)

ACTUACIÓN PROCESAL

Previamente a iniciar el incidente de desacato, el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo Oral de Medellín, mediante auto del doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012)² requirió a la Fiduprevisora como agente liquidador del Instituto de Seguros Sociales y a Colpensiones, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, informaran las razones por las cuales no se dio cumplimiento al fallo de tutela.

En atención a dicho requerimiento, la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES allegó respuesta el

¹ Folio 6

² Folio 7

día 11 de enero de 2013³, en la que manifestó que el despacho deberá establecer si la sanción es procedente o no, pese a que la competencia legal para el cumplimiento de fallos se trasladó del Instituto del Seguro Social a COLPENSIONES y el artículo 3 del capítulo I del Decreto N° 2013 del 28 de septiembre de 2012, estableció la obligación legal en cabeza del ISS de entregar a COLPENSIONES los soportes y documentos necesarios que se encuentren en su poder para que COLPENSIONES proceda al cumplimiento del fallo. Por lo que solicita se declare que COLPENSIONES no se encuentra en desacato con relación a la orden proferida por el juez; solicita además que se ordene al Instituto del Seguro Social que realice la entrega digitalizada o física del expediente a COLPENSIONES y a su vez, conceder a Colpensiones el plazo de dos (2) meses contados a partir del recibo efectivo del expediente, para dar respuesta de fondo a la solicitud pensional objeto de la presente acción de tutela teniendo en cuenta el gran volumen de solicitudes que se encuentran represadas y que no dio trámite el Seguro Social en su momento.

Posteriormente, mediante auto del 17 de enero de 2013⁴, se decidió abrir el incidente de desacato y se corrió traslado al representante legal de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y al Representante legal del Instituto de Seguros Sociales para que en el término de tres (03) días hábiles informaran las razones por la cuales no se había cumplido con lo ordenado en el fallo de tutela, requerimiento ante el cual, en memorial allegado por el Instituto de Seguros Sociales el día 28 de enero de 2013⁵, manifestó que el expediente pensional de la señora **Eda del Carmen Isaza**, se remitió el 21 de diciembre de 2012 a COLPENSIONES tal y como se evidencia en el aplicativo virtual EVA con el fin de que dicha AFP den respuesta de fondo al accionante; para el efecto, anexa copia del pantallazo del visor EVA , donde se visualiza que el expediente fue entregado desde el 21 de diciembre de 2012.

Por su lado Colpensiones en memorial de fecha 28 de enero de 2013⁶ expone que el Gobierno Nacional a través del artículo 38 del Decreto 2013 de 2012 previó un plan de entrega de archivos y expedientes pensionales, es por lo que COLPENSIONES y el Instituto de Seguros Sociales en liquidación suscribieron un

³ Folio 14 al 20

⁴ Folio 21

⁵ Folio 32

⁶ Folios 34 a 41

acuerdo que permitiera la entrega inmediata de expedientes pensionales que tuviera en trámite judicial, con el fin de cumplir de manera prioritaria el mandato constitucional contemplado en el artículo 48 de la Constitución Nacional. Debido que el acuerdo con el Instituto de Seguros Sociales no ha finalizado, esta entidad no ha entregado en su totalidad los expedientes y *“En efecto, COLPENSIONES aún no ha recibido el expediente administrativo de EDA DEL CARMEN ISAZA... que contienen toda la información suficiente, completa, veraz e idónea, para resolver de fondo la solicitud pensional presentada ante el ISS, generando una situación actual de imposibilidad material para (Sic) responder de fondo lo solicitado.”*⁷

Posteriormente el Instituto de Seguros Sociales allega nuevos memoriales⁸ a través de los cuales reitera que el expediente administrativo de la accionante fue remitido a Colpensiones desde el 21 de diciembre de 2012, con el fin de que dieran respuesta de fondo a su solicitud.

Posteriormente, mediante providencia del 8 de marzo de 2013⁹, el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo Oral de Medellín resolvió abstenerse de imponer sanción alguna contra el representante legal del Instituto de Seguro Social en liquidación en razón a que el ISS acreditó que ya había hecho entrega de toda la información necesaria para resolver de fondo la petición instaurada por la señora **Eda del Carmen ISaza** el 1 de noviembre de 2011 documentación remitida a Colpensiones desde el 21 de diciembre de 2012, y por otro lado resolvió sancionar al Doctor Pedro Nel Ospina Santamaría, Representante Legal de la Administradora Colombiana de Pensiones – Regional Antioquia, con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por incurrir en desacato al fallo de tutela proferido por ese juzgado el 9 de octubre de 2012.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Decreto Ley 2591 de 1991 *“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”*, dispone en su artículo 27 que una vez que se profiera el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable de la amenaza o vulneración de los derechos constitucionales fundamentales

⁷ Folio 34 vuelto

⁸ Folios 45,46, 49 y 57

⁹ Folios 60 a 67.

debe cumplirlo sin demora, y que si no lo hace dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior de aquél y lo requerirá para que lo haga cumplir y le abra el correspondiente procedimiento disciplinario, so pena de que si no procede en esa forma también se abra proceso contra dicho superior.

Además, la citada disposición establece que el juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia y que, en todo caso, aquél establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá competencia hasta que quede restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.

Por su parte, el artículo 52 del Decreto 2591 de 1.991, prescribe lo siguiente en relación con el trámite del incidente de desacato:

“Artículo 52.- Desacato.- La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. (La consulta se hará en el efecto devolutivo)”.

De acuerdo con lo expuesto, el desacato tiene fundamento en el incumplimiento de la orden dada por un juez dentro del trámite de una acción de tutela, así que inobservada la orden, el juez debe imponer la sanción correspondiente por desobediencia.

En el asunto sub - examine el accionante promovió el mencionado incidente, pues manifestó que la entidad no había dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela proferido por el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo Oral de Medellín, el día 9 de octubre de 2012.

La Corte Constitucional, al referirse a la facultad del juez para sancionar por desacato a quien incumple un fallo de tutela, contenida en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, precisó lo siguiente¹⁰:

¹⁰ Esta posición fue reiterada por la Sala en auto de 27 de abril de 2006, M.P. doctor Héctor J. Romero Díaz.

“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.

“[...] El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia” (subrayas ajenas al texto).

“Del texto subrayado se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser así, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que éste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreció.

“Segundo, la imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la sentencia.

En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser sancionado acatando. Al contrario, si el accionado no acepta la existencia de desacato y el juez, por incorrecta apreciación fáctica, determina que éste no existió, se desdibujará uno de los medios de persuasión con el que contaba el accionado para que se respetara su derecho fundamental. Al tener un carácter persuasivo, el incidente de desacato sí puede influir en la efectiva protección de los derechos fundamentales del accionante y en esa medida existiría legitimación para pedir la garantía del debido proceso a través de tutela.” (Negrilla intencional de la Sala Sentencia T-421 de 23 de mayo de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

La Corte Constitucional ha sido clara y contundente al señalar, entre otras, en sentencias T-1686 de 2000, con ponencia del Doctor JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, T-553 de 2004, con la tesis del Doctor Jaime Araujo Rentería y C-1006 de 2008 ha reiterado:

“El cumplimiento de los fallos judiciales es un imperativo del Estado Social de Derecho, fundamento de la democracia y parte integrante de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”, reiterándose en la misma providencia que “el incumplimiento de las sentencias judiciales constituye una trasgresión del derecho fundamental de acceso a la justicia puesto que el reconocimiento de esta garantía en el texto constitucional se encuentra encaminado, como es obvio, no solo a garantizar la posibilidad de interponer acciones frente a tribunales competentes e imparciales, y a reclamar una decisión sobre las pretensiones debatidas- y cabe anotar que en este punto adquiere sentido la

totalidad del proceso judicial agotado incluye el derecho a obtener cumplimiento de las decisiones consignadas en las sentencias. De otra forma desvanece la legitimidad de la Rama Judicial y sus decisiones se convierten en meras proclamaciones sin contenido vinculante".
(Subrayas fuera de texto).

La Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, en el sentido del cumplimiento de los fallos judiciales encaminados a garantizar los derechos fundamentales, se deben acatar íntegramente, ha dicho la alta Corporación:

"Sobre el cumplimiento de los fallos judiciales como fundamento del estado Social de Derecho la Corte sintetizó la línea jurisprudencial, reiterando que la observancia de las decisiones judiciales que ordenan a la administración pública hacer efectivo el goce de un derecho fundamental; exige cabal cumplimiento de lo ordenado, pues (i) es una garantía para la realización de los fines del estado y la prevalencia del orden Constitucional (ii) involucra la concreción del valor de la justicia y la materialización del principio superior de la confianza legítima y (iii) su incumplimiento no solo atenta contra el principio de buena fe, porque la persona que acude ante un Juez está convencida de que la decisión de éste será acatada por la autoridad o particular a quien corresponda, sino que viola los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, porque impide la efectividad de la orden impartida por el Juez competente".

En el caso concreto, en primer lugar, se debe destacar que el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo Oral de Medellín tuteló el Derecho Fundamental de Petición de la señora **Eda del Carmen Isaza**.

Debe tenerse en cuenta que la orden que da el Juez en el proceso de tutela debe ser acatada de inmediato y por su destinatario, pues de lo contrario no se cumplirá con el objeto de la acción que no es otro que la efectiva protección de los derechos fundamentales.

El incumplimiento de los plazos y términos otorgados por el Juez, de las garantías fundamentales que se avalan en la sentencia proferida el pasado 9 de octubre de 2012, es de tal gravedad, que además de no cumplirla y hacer caso omiso a la orden impartida, desconoce la autoridad judicial que la profiere, las reglas Constitucionales que lo prohíben, logra desnaturalizar la esencia misma de la acción de tutela que busca una respuesta inmediata, eficaz y contundente a la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales e institucionaliza una prórroga de la vulneración de tales derechos inalienables e inconcebibles

dentro de la filosofía que inspira la acción constitucional y totalmente opuesta a sus postulados, pero además, constituye una nueva afrenta a las prerrogativas fundamentales del ser humano, porque como quedó dicho, aquel tiene el carácter de derecho fundamental, a las cuales es imposible llegar si no se garantiza que las decisiones del Juez Constitucional se cumplan en término, calidad y cantidad.

En tal sentido, se ha manifestado la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-1006 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo, se ha dicho:

“comprobado judicialmente el desconocimiento de un derecho fundamental por un agente estatal, el deber de éste es hacer cesar la violación en el término fijado para ello por el Juez Constitucional o probar oportunamente la imposibilidad de hacerlo. Permitir que los funcionarios cumplan las órdenes del Juez de tutela cuando a bien lo tengan, incluso con posterioridad al fallo de consulta, implica autorizar al Estado para prolongar en el tiempo la vulneración de los derechos fundamentales, hacer nugatorias las garantías constitucionales a los mismos, propiciar la repetición de los agravios contra esos derechos y contrariar el fin para el cual están instituidas las autoridades”

Recuérdese que el legislador sanciona a quien “por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial” elevando tal conducta a la categoría de delito contra la administración pública (artículo 454 C.P., fraude a resolución judicial).

Nuevamente se reitera lo preceptuado por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, el cual insiste en que el incumplimiento de las decisiones judiciales en tutela, a más de las sanciones en él previstas, genera las sanciones penales a que haya lugar y a renglón seguido, el artículo 53, replica:

“Artículo 53 SANCIONES PENALES. El que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este Decreto incurrirá según el caso, en fraude en resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar”.

Conforme se expuso anteriormente, a la señora **Eda del Carmen Isaza** no se le dio cumplimiento a la decisión judicial emitida el 9 de octubre de 2012, en los términos indicados por el Juez Constitucional, cuya orden fue del siguiente tenor literal:

“PRIMERO: Por violación al derecho fundamental de petición de la señora Eda del Carmen Isaza... por parte del Seguro Social en Liquidación-Pensiones, se CONCEDE LA TUTELA.

SEGUNDO: ORDENAR al Seguro Social en Liquidación-Pensiones, por intermedio de su representante legal, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, **si aun no lo ha hecho**, proceda a remitir toda la documentación relativa a la petición presentada el 01 de Noviembre de 2011 por la señora Eda del Carmen Isaza, que aun se encuentre en su poder a **COLPENSIONES**.

TERCERO: ORDENAR a **COLPENSIONES**, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al cumplimiento de lo ordenado al ISS en Liquidación, resuelva la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes elevada por la señora Eda del Carmen Isaza... el día 01 de Noviembre de 2011 relativa al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en razón del fallecimiento de su cónyuge, el señor Luis Eduardo Zapata García; dentro del plazo otorgado deberá notificar la decisión a la interesada...”¹¹

De lo anterior, la entidad accionada Instituto de Seguros Sociales a través de su Representante Legal Fiduciaria la Previsora S.A, en varias oportunidades allegó escrito manifestando que el expediente administrativo de la señora **Eda del Carmen Isaza** había sido remitido a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones desde el día 21 de diciembre de 2012, para lo cual aportó copia del pantallazo del visor EVA donde se observa que efectivamente la documentación fue migrada en esa fecha.

Al respecto el Decreto 1213 del 28 de septiembre de 2012 en su artículo 3º inciso 4 dispuso:

“Excepcionalmente, con el objeto de no afectar la prestación del servicio público en pensiones, y por un término no superior a seis (6) meses, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación seguirá ejerciendo la defensa en las acciones de tutela relacionadas con la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que se encuentren en curso al momento de entrada en vigencia del presente decreto. El cumplimiento de los fallos de tutela relacionados con la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida corresponde a Colpensiones.”

Así las cosas se establece que el Instituto de Seguros Sociales en liquidación ya no tiene competencia para resolver solicitudes pensionales, toda vez que se ordenó su liquidación en virtud del decreto 1213 del 28 de septiembre de 2012; en consecuencia, la entidad encargada de dar respuesta de fondo a los

¹¹ Folio 6

derechos de petición relacionados con el régimen de prima media con prestación definida es la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

Por lo anterior y en el caso concreto, se acreditó por parte del Instituto de Seguros Sociales en liquidación la entrega efectiva del expediente administrativo de la señora **Eda del Carmen Isaza** desde el 21 de diciembre de 2012 y a partir de esa fecha Colpensiones contaba con un término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia para dar respuesta de fondo a la solicitud elevada por la actora desde el 1 de noviembre de 2011, relacionada con el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y ha transcurrido más de tres meses desde la remisión del expediente prestacional y no se ha resuelto de fondo la solicitud de la señora **Eda del Carmen Isaza**, por lo que es evidente que el término de 48 horas otorgado en la sentencia de tutela del 9 de octubre de 2012, está más que vencido.

De otro lado, en conversación telefónica sostenida con la accionante¹², manifestó que no ha recibido respuesta alguna por parte de Colpensiones, a través de la cual se le resuelva su petición relativa al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

Por lo anterior, es claro que se han violado todos los principios y órdenes de carácter constitucional y fundamental, ya que el fallo de tutela en el cual se protegen los derechos fundamentales de la accionante fue proferido desde el 9 de octubre de 2012 y Colpensiones pese a varios requerimientos efectuados por el Juzgado de Instancia, hizo caso omiso a las solicitudes de cumplimiento, además no emitió alguna justificación razonada y determinante para no cumplir la orden impartida en su momento. Así mismo, ha incurrido en mora para responder de forma clara, concreta y de fondo la solicitud que presentó la señora **Eda del Carmen Isaza**, relativa al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

Forzoso es entonces, concluir que se presentó un incumplimiento por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, pues es obvio que la persona en cuyo favor se decreta la protección tiene el derecho a que mientras no se modifiquen de manera sustancial las circunstancias que el Juez ponderó, el amparo que se le concede tenga vocación de ser

¹² Folio 8o

obligatorio y a que no se desvirtúe su sentido sin un fundamento serio y razonable.

Así es claro, que la sanción impuesta por el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo Oral de Medellín, el día 8 de marzo de 2013, es procedente y además resulta justa y equitativa dada la naturaleza del incumplimiento.

La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a la respuesta al Derecho de Petición, así:

*“Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) **comunicándole al solicitante.***

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.¹³

Coherentemente, con lo aquí expuesto, se impone **CONFIRMAR** la providencia objeto de consulta, por encontrarse acreditado que la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones desacató la orden proferida por el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo Oral de Medellín el nueve (09) de octubre de dos mil doce (2012), en el sentido en que la entidad contó con el tiempo suficiente para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela.

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA UNITARIA,**

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMESE la sanción impuesta al Doctor **Pedro Nel Ospina Santamaría**, Representante Legal de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – Regional Antioquia, en la providencia proferida por el Juzgado Veintisiete (27)

¹³ Sentencia T-043 de 2009 M P Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

Administrativo Oral de Medellín, el ocho (08) de marzo de dos mil trece (2013), por los motivos anteriormente expuestos.

SEGUNDO: El hecho de que se confirme la sanción no lo exonera de cumplir la sentencia, de conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: en firme la presente providencia, remítase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ ELENA JARAMILLO MUÑOZ
Magistrada

C.